

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO



JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.
SECCIÓN SEGUNDA

AUTO INTERLOCUTORIO: 585
RADICACIÓN: 11001-33-35-027-2021-00333-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: BIBIANA FARLEY MEJÍA ÁLVAREZ
DEMANDADAS: LA NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, DISTRITO CAPITAL BOGOTÁ-
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN y FIDUCIARIA LA
PREVISORA S.A.
ASUNTO: Resolución excepción previa falta de integración de
litisconsorcio necesario

Bogotá, D.C., seis (6) de julio de dos mil veintidós (2022).

La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en su escrito de contestación de demanda, formuló la excepción previa de *“falta de integración de litis consorcio necesario”* y la excepción mixta de *“ineptitud sustancial de la demanda por falta de legitimación en la causa por pasiva del fondo de prestaciones sociales del Magisterio para el pago de la sanción moratoria”*, y el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación planteó la excepción mixta de *“falta de legitimación en la causa por pasiva”*, de las cuales la primera será resuelta a continuación teniendo en cuenta lo reglado en el parágrafo 2 del artículo 175 del CPACA, modificado por el artículo 38 de la Ley 2080 de 2021, en concordancia con los artículos 100 a 102 del CGP, y las restantes se harán en la sentencia porque *“el parágrafo 2º del artículo 175 del CPACA, por indicación expresa, determinó que los únicos medios exceptivos que se resuelven antes y durante el desarrollo de la audiencia inicial son las excepciones previas, al señalar que se formularán y decidirán según lo regulado en los artículos 100, 101 y 102 del CGP”* (Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Dr. William Hernández Gómez, auto del 16 de septiembre de 2021 Rad. No. 2648-2021).

La excepción a resolver se fundó en que es forzosa la comparecencia de la Secretaría de Educación de Bogotá, en la medida que, según las previsiones del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, se debe establecer la responsabilidad del ente territorial en el pago de la sanción moratoria, al no poder atenderse la misma con recursos del FOMAG.

El artículo 61 del CGP¹, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, consagra que el litisconsorcio necesario es una figura procesal en virtud de la cual se torna obligatoria la comparecencia de una persona más al contradictorio, a efecto de resolver uniformemente el litigio planteado, so pena de que la falta de integración conlleve una violación del debido proceso y el desconocimiento de principios esenciales del ordenamiento constitucional, como la justicia, la vigencia de un orden justo y la eficacia de las decisiones judiciales².

¹ Artículo 61. *Litisconsorcio necesario e integración del contradictorio.* Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

² Sentencia T-056 de 6 de febrero de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell.

Por su parte, el parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 reguló lo relativo a la responsabilidad de los entes territoriales en la cancelación de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías. Veamos:

“PARÁGRAFO. La entidad territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación Territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago de las cesantías”.

Conforme a lo anterior, se puede concluir que a partir de la vigencia de la citada norma los entes territoriales ya no actúan como unos meros facilitadores para que los docentes oficiales tramiten el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que están a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pues ahora -eventualmente- pueden responder por la sanción derivada del pago extemporáneo de las cesantías.

En el presente caso se evidencia que la parte demandante promovió la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y solicitó que previa declaración de existencia de los actos presuntos derivados de la falta de respuesta a las peticiones radicadas el 16 de septiembre de 2020 y el 22 de febrero de 2021, se declare la nulidad de tales actos fictos y del oficio 20211090784011 del 12 de abril de 2021 y, en consecuencia, se le reconozca y pague la sanción moratoria por el no pago oportuno de su cesantía parcial.

Como se observa, la demanda fue dirigida también contra el Distrito Capital Bogotá-Secretaría de Educación, y la demanda fue admitida y se corrió traslado a esa entidad territorial, luego la excepción planteada deviene infundada, pues con observancia del parágrafo del artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 ese ente fue convocado a este juicio, lo cual denota que el contradictorio se encuentra debidamente integrado.

En mérito de lo expuesto, se dispone:

1. DECLARAR infundada la excepción previa de *“falta de integración de litis consorcio necesario”* formulada por La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
2. REINGRESAR el expediente al despacho, una vez ejecutoriado el presente proveído.
3. RECONOCER al Dr. Luis Alfredo Sanabria Ríos, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.211.391 expedida en Bogotá y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 250292 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, y a la Dra. Ana María Manrique Palacios, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.052.401.595 expedida en Duitama y titular de la tarjeta profesional de abogada No. 293.235 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderados principal y sustituta, respectivamente, de La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en los archivos *“11PoderContestacionDemanda.pdf”* y *“12.AnexoContestacionDemanda.pdf”* del expediente digital.
4. ACEPTAR la renuncia al poder presentada por la Dra. Ana María Manrique Palacios, en su calidad de apoderada sustituta de La Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que aparece en los archivos *“21RenunciaPoder.pdf”* y *“22ComunicacionRenuncia.pdf”* del expediente digital, en los términos previstos en el artículo 76 del CGP.
5. RECONOCER a la sociedad Herrera & Jiménez Consultores Legales SAS, como apoderada del Distrito Capital Bogotá-Secretaría de Educación, en los términos y para los fines conferidos en el poder y los anexos obrantes a folios 12 a 43 del archivo *“16ContestacionDemandaSED.pdf”* del expediente digital.

Los memoriales de los apoderados deben ser enviados únicamente al correo electrónico correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, los cuales deberán contener los 23 dígitos del proceso, el juzgado al cual se dirige, las partes del proceso, y no podrá exceder 5000 KB.

La presente providencia será notificada en estado de acuerdo a lo establecido en el artículo 180-1 y 201 del CPACA, el cual podrá ser consultado en el portal de internet de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE

HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ
Juez

DSBA

Firmado Por:

Humberto Lopez Narvaez
Juez
Juzgado Administrativo
027
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: b740cce74b9f24707d4e80220f32f6a2569530bfc45a1c84a0fb2e88e57dc7c9

Documento generado en 06/07/2022 06:00:34 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>